miedo ante las posibles agresiones o abusos. En otra instancia, pero siempre bajo el marco de la explotación económica y sexual de menores, el trabajo infantil *doméstico* constituye en la región una modalidad que ya ha sido calificada internacionalmente como de *esclavitud moderna* (OIT: 2003; COIPRODEN: 2005). Ésta afecta sobre todo a niñas y mujeres adolescentes, vulnerando sus derechos sociales y familiares más elementales.

LA PROPIEDAD DE LA TIERRA ESTÁ DESPROPORCIONADAMENTE CONCENTRADA

Se observa por lo general una gran desigualdad en la distribución de la tierra, el problema para el acceso a la vivienda y una caída en picado de los precios de las materias primas para la exportación. La propiedad desigual de la tierra obstaculiza el desarrollo de una actividad agrícola capaz de aportar prosperidad a las zonas rurales. La proporción de campesinos/as subproletarios sin tierras y la de desocupados/as urbanos está en aumento, creciendo el número de los que migran cada año desde las zonas rurales a las ciudades, que está afectando especialmente a las mujeres, y produciendo una desestructuración de las bases agrícolas familiares. Algunos países se han beneficiado particularmente de las condiciones especiales de comercialización de los Estados Unidos para los productores textiles en el área del Caribe. La industria textil, conocida como "maquila", se ha desarrollado geométricamente, haciendo de México y Honduras los dos surtidores latinoamericanos más grandes del mercado estadounidense. Las actividades de la industria textil, las exportaciones tradicionales (esencialmente agrícolas) y las plantas de montaje son fuente de riqueza para los propietarios, que son mayoritariamente hombres, pero no necesariamente para los trabajadores/as. El desafío para el sector sigue siendo el aumento del valor agregado para los/as fabricantes locales y la diversificación de sus mercados de exportación.

En toda Latinoamérica se observa que las grandes reservas de materias primas y de carácter energético, que en su mayoría están en manos privadas, suponen paradójicamente una rémora para el desarrollo social a lo interno de los países, por cuanto socios comerciales como Estados Unidos ejercen políticas de "prevención" o contención contra eventuales reformas públicas, que afectarían muy negativamente a su economía a través de la balanza de pagos.

Los grupos indígenas, ecologistas y campesinos que han venido levantándose contra la explotación abusiva de los recursos por las empresas transnacionales se están viendo amenazados por éstas en Honduras, Guatemala, México y otros países de la región. Estas amenazas se producen a través de su influencia política, pero también de forma directa contra la integridad física y psicológica de sus líderes y lideresas.

LA MULTICULTURALIDAD ES UNO DE LOS RETOS DEL DESARROLLO EN LA REGIÓN

Se echan en falta todavía políticas multiculturales reales que den cabida de manera explícita a las diferentes visiones y discursos culturales, étnicos y religiosos. Las poblaciones indígenas en Centroamérica suman aproximadamente unos seis millones y medio de personas, casi un 20% de la población total, y una de cada tres es de nacionalidad guatemalteca. Estas poblaciones presentan una menor expectativa de vida y de acceso a la educación, mayores índices de deserción escolar, de malnutrición, de mortalidad a causa de enfermedades prevenibles, de malnutrición, de mortalidad infantil, de mortalidad materna, y en general muestran mayores índices de pobreza que la población no indígena. En el marco del "diálogo entre culturas", la construcción de la ciudadanía indígena viene constituyendo una lucha por el reconocimiento de derechos específicos en el marco de los Estados, que opera a través de la politización democrática de las identidades —esto es, de una dinámica, la etnicidad, mediante la cual la identidad cultural se constituye en un eje de acción política, de negociación con el Estado y de visibilidad pública del actor-indígena en la sociedad.

Los líderes y lideresas de los movimientos indigenistas y afrodescendientes valoran públicamente desde hace más de una década la posibilidad de establecer negociaciones y alianzas. Sus demandas, no reconocidas hasta muy recientemente (CEPAL: 2002a), se han ido concretando en torno a la carencia inequitativa de servicios de agua potable, luz eléctrica, caminos de acceso a las comunidades, titulación de sus tierras comunales, infraestructuras educativas y sanitarias, etc. (CEPAL: 2004b) y a otros fenómenos de alta incidencia relativa como el analfabetismo y la desnutrición. Además, también han expuesto su interés por la recuperación de su cultura (por ejemplo, la etnia garífuna) a través de la incorporación de su historia y tradiciones en los contenidos educativos reglados, la educación bilingüe, etc. Destaca la presencia de representantes públicos de diferentes etnias en los gobiernos de Panamá y Belice, y sobre todo en Guatemala, donde se tiene de hecho la experiencia de los Consejos Nacionales Indígenas.

Los/as afrodescendientes pueblan la costa caribeña de Centroamérica (especialmente en Belice) y son mayoría en la población insular del Caribe, a excepción de Cuba. Se puede generalizar la persistencia en mayor o menor medida de actitudes racistas y discriminatorias de blancos y mestizos hacia mulatos y negros, de mulatos a negros, e incluso

de negros anglófonos a negros hispanohablantes (NNUU: 2001) —por ejemplo, en las Islas de la Bahía, en Honduras.

LA POBREZA SE MIDE EN TÉRMINOS DE EDUCACIÓN Y SALUD

En los últimos quince años ha habido progresos importantes en cobertura educativa y sanitaria en toda la región, si bien demandan mayor nivel y calidad en el gasto social y una continua vigilancia para asegurar los destinatarios/as de los recursos, pues todavía persisten grandes diferencias en el acceso a estos derechos fundamentales.

Aproximadamente una de cada cuatro personas con más de quince años no sabe leer ni escribir, los niveles de escolaridad están todavía muy por debajo de lo deseable y además la incidencia empeora en aproximadamente un 25% en el caso de las mujeres (CEPAL y OIJ: 2004). Al relacionar los baremos educativos con el nivel de pobreza desde una perspectiva sociolaboral, se observa que la incidencia de la pobreza se reduce en cuatro puntos porcentuales por cada año cursado hasta los doce años de estudio, superando el 50% para aquellas que no consiguieron completar la Primaria. Además, perdura el alto índice de alumnos/as que no promocionan nivel escolar.

Si relacionamos escolaridad con los niveles de ingreso familiar *per cápita* comprobamos la continuidad de grandes diferencias en el acceso a la educación, favoreciendo el fenómeno de la realimentación de la desigualdad propio de las sociedades *duales* occidentales. Aunque en general ha mejorado la tasa bruta de matriculación en educación primaria (con una ligera desigualdad a favor de los niños sobre las niñas), la de Secundaria está disminuyendo. Los factores externos que están asociados a la deserción escolar son los de falta de recursos económicos en los hogares, la desestructuración familiar, la figura ausente del "padre" en el hogar, así como por motivos de embarazos en la adolescencia, con un efecto negativo claramente más importante para las mujeres (CEPAL y OIJ: 2004). Además, se han detectado factores internos que han reforzado esta situación: el bajo rendimiento, los problemas de conducta y el autoritarismo de los/as docentes. Así, los Estados se están encontrando con altos costos asociados al analfabetismo funcional, la baja productividad en el trabajo (y su efecto en el menor crecimiento de las economías) y los mayores gastos para financiar programas sociales.

Por otra parte, una no observancia de la cuestión de género en los centros educativos y políticas estatales —con un currículo "oculto" marcado por variables

etnocéntricas, sexistas y heterocéntricas—, revela que la educación que se brinda no está proporcionando a los niños/as y adolescentes la formación adecuada que les capacite para convivir como hombres y mujeres desde la igualdad y el respeto, así como desarrollando actitudes de corresponsabilidad tanto en los ámbitos público y privado; no están siendo preparados para asumir su trayectoria vital personal y profesional, que se manifestaría en la construcción equitativa y democrática de la sociedad futura.

Existe un número insuficiente de centros educativos y se dan graves deficiencias en infraestructuras y logística que dificultan entre otras cosas la asistencia de los propios niños/as, la participación de la comunidad en la vida escolar y la planificación de escuelas de adultos/as en horarios extraescolares (Requejo: 2003). También hay una deficiente cobertura de guarderías y faltan cupos en las guarderías existentes, afectando fundamentalmente a madres solteras que no pueden dejar a sus hijos/as para incorporarse al sector productivo. Además, se observa una deficiente formación del profesorado y equipos psicopedagógicos, y una notable falta de participación comunitaria en la gestión educativa de las comunidades escolares. Una de las manifestaciones más alarmantes es el progresivo incremento de diferentes manifestaciones de la violencia en el entorno educativo formal, como por ejemplo el acoso entre pares (conocido como *bullying*), o la violencia entre adolescentes matriculados en institutos considerados como "rivales", como sucede en San Salvador (FLACSO: 2004).

En el ámbito de la salud comunitaria, prácticamente en todos los países de la región se han reducido en los últimos años los niveles de mortalidad infantil, elevando el índice de esperanza de vida al nacer, si bien la malnutrición todavía mantiene índices altos. Otro desafío sigue siendo el control de enfermedades transmitidas por vectores, y el reforzamiento del control de la malaria y el dengue —todavía se echan en falta medidas ambientales sostenibles y de sensibilización que generen verdaderos cambios en las conductas de la ciudadanía.

En términos de gasto en salud, se puede decir que el promedio aproximado rondaría hasta un significativo 50% concentrado en el sector privado, un 30% asociado a los sistemas públicos de salud y un 20% al gasto gubernamental. El alto nivel de desigualdad propio de nuevo de las sociedades *duales,* según Wilkinson y Kaplan, explica que también en países donde se goza de una excelente atención clínica y preventiva (como Costa Rica o Panamá) sigan existiendo por el contrario importantes inequidades o diferencias en el acceso a estos servicios, que tiene consecuencias negativas no sólo para la población directamente afectada, sino para el conjunto total de la ciudadanía.

Cumplimiento del ODM nº 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre

En 1990, el 11,3% de la población latinoamericana vivía con menos de un dólar diario; para el año 2001, estos niveles de precariedad se han reducido ligeramente hasta el 9,5%.

A niveles nacional y local, se observa una coordinación entre los diferentes niveles sanitarios muy debilitada, que se refleja en el mal funcionamiento de los centros de salud, o el desabastecimiento de medicamentos y suministros. A nivel regional, destaca la Reunión del Sector Salud y de Centroamérica y República Dominicana RESSCAD (cuya Secretaría está a cargo de la OPS), que ha permitido fortalecer el contacto entre los diferentes Ministerios de Salud, instituciones de seguridad social e instituciones de agua y saneamiento, con vistas a encarar procesos de reforma del sector más coherentes y eficientes.

Las mujeres están identificadas generalmente como las agentes responsables de su propia salud pero también de la salud familiar y comunitaria; sin embargo, siguen echándose en falta la formación de los profesionales de la salud en materia de género y programas específicos dirigidos a las situaciones más directamente relacionadas a las mujeres (como por ejemplo el cáncer cérvico uterino o de mamas), muy especialmente en lo referente a la salud sexual y reproductiva. Se observa todavía un alto nivel de embarazos no planificados, de abortos no seguros en circunstancias de riesgo, y de transmisión de enfermedades infecto-contagiosas por vía sexual, como el VIH-SIDA. Destaca en este sentido que las políticas siguen por lo general rechazando el reconocimiento de la sexualidad en los/as menores de edad —así como otras circunstancias propias de la cultura "adulto-céntrica" (POI: 2003)—, con la consiguiente rémora de cara a un progreso en aspectos tan cruciales.

El informe de 2002 del ONUSIDA advierte que: "En América Latina y el Caribe la epidemia está bien consolidada, y existe el peligro de que se propague de forma más rápida y extensa en ausencia de respuestas eficaces. Uno de los factores que favorecen la propagación del VIH es la combinación de desarrollo socioeconómico desigual y gran movilidad de la población, tal como ocurre en Centroamérica. En esa región la epidemia se está exacerbando, y tiende a concentrarse en los grupos socialmente marginados".

EL VIH-SIDA SIGUE AUMENTANDO

Se puede afirmar que las tendencias socioeconómicas han venido favoreciendo la difusión del VIH-SIDA en la región (FICR: 2003; 2004), desbordando claramente la categoría de enfermedad, según el Programa Conjunto de Naciones Unidas ONUSIDA, para presentarse como un problema social que incide en el desarrollo humano.

En el Caribe es la principal causa de muerte de hombres jóvenes, siendo la zona geográfica con más alta incidencia relativa del mundo, con un 2,3%. Sólo en esta subregión se contabilizan más de 250.000 niños/as huérfanos relacionados a la

pandemia. Los países más afectados son Haití, la República Dominicana y Honduras, que aunque registra solamente el 17% de la población en Centroamérica, presenta el 43% del total de los casos, con especial prevalencia en la zona norte, y muy especialmente entre la ciudadanía garífuna. También Guatemala y El Salvador han registrado un avance negativo notable. Además, la tasa de incidencia relativa en mujeres se ha incrementado sustancialmente en los últimos años. El índice de prevalencia del VIH-SIDA en el Caribe es sólo superado por el de África Subsahariana y en la actualidad es una de las principales causas de muerte entre los hombres menores de 45 años.

La población migrante es una de las que, como colectivo, tiene uno de los mayores riesgos de infección del VIH, deterioro de la salud y desarrollo del SIDA, debido a la falta de acceso a los servicios, representación legal y exposición a la violencia sexual. Igualmente la población homosexual y transgénero se ve perjudicada por los prejuicios homofóbicos presentes en la gestión pública, que dificultan un más certero análisis de las causas, y la consecuente articulación de programas especializados de calidad. Es un hecho que el propio estigma asociado a la enfermedad está obstaculizando de forma decisiva las estrategias de prevención y control.

Cumplimiento del ODM nº 6: Combatir el VIH-SIDA

La prevalencia en Latinoamérica y el Caribe del VIH-SIDA aumentó en los últimos diez años del 0.30% al 0.72%. Además, la tuberculosis todavía no se ha erradicado en el continente.

LAS FAMILIAS DEMANDAN AYUDA

Se detecta una situación de desestructuración familiar generalizada, donde se producen muy variadas y nuevas formas de convivencia familiar, como por ejemplo la que agrupa a varias generaciones monoparentales viviendo en el mismo hogar. Un fenómeno asociado muy característico es el de la violencia dentro de la familia, y especialmente la ejercida por el hombre sobre la propia pareja (UNIFEM e Isis Internacional: 2002; CEPAL: 2002b), o sobre sus propios hijos e hijas —de tipo psicológico, físico y sexual. En este escenario, la proliferación de embarazos y las conductas de abuso del alcohol y de las drogas (derivados del opio y de la base de la coca, y en menor medida la marihuana, dándose una mayor incidencia en hombres) han venido a impulsar la falta de control de los padres, madres y educadores/as sobre el proceso de desarrollo psicoeducativo de sus hijos/as. Esto ha contribuido a agravar la creencia en la eficacia de estilos educativos o bien súper-permisivos y negligentes, o bien autoritarios basados en el castigo y la humillación, en detrimento de los estilos que basan el aprendizaje en el ejercicio de las responsabilidades (NNUU: 2002; OPS: 2003).

Las manifestaciones más alarmantes —en un contexto marcadamente periurbano— son por un la lado la del incremento en número de “niños/as de la calle” o

Otros fenómenos sociofamiliares muy comunes de este contexto de desigualdad social son la poca capacidad de los padres y madres para ejercer su rol parental y alentar el desarrollo de sus hijos/as, las pocas oportunidades de recreación y aprovechamiento del tiempo libre para los menores de edad (menos aún en el caso de las niñas), la reproducción de las relaciones machistas en las siguientes generaciones a través de la educación, la discriminación familiar y comunitaria hacia hijos/as homosexuales, la persistencia de patrones de conductas de abuso en los padres y madres (sobre todo del alcohol), la emigración precaria en busca del envío de remesas, el consiguiente abandono de hijos/as, etc.

"huelepegas", dedicados a la mendicidad en un contexto de indigencia (muy comunes, por ejemplo, en basureros urbanos), no escolarizados y con problemas de adicción a los inhalantes (disolventes contenidos en fórmulas diluyentes para pinturas y pegamentos), apareciendo incluso en países que hasta hace bien poco no conocían este fenómeno; y por otro lado, la formación de pandillas de jóvenes o "maras" (OPS: 2002). Estos niños/as y jóvenes tratan de desarrollarse en un entorno caracterizado por la falta de referencia parental, por el debilitamiento de sus redes sociales y por la ausencia de identidad en proyectos colectivos. Así, se va generando un estado de autopercepción marginal y de exclusión social que refuerza su propia condición, y la opinión pública sólo reconoce su rol como sujetos de violencia social, negando que en un primer estadio fueron objeto de ella (OPS: 2003; UCA: 2004).

Por influencia del modelo argentino, y a partir de las tradicionales "peñas" o "porras" de aficionados a los clubes de fútbol, se han empezado a formar en México (y en menor medida en algunos países de Centroamérica) "barras" o hinchadas radicales organizadas, compuestas principalmente por adolescentes y jóvenes. La traducción de las frustraciones personales y sociales en odio visceral hacia un "enemigo" simbólico, hace que estos grupos lleguen a cometer delitos y crímenes contra otras hinchadas de clubes rivales, bajo la percepción de que son personas de condición inferior que merecen ser objeto de discriminación y violencia.

EL MENSAJE INDIVIDUALISTA Y REPRESIVO SE INSTALA EN LA OPINIÓN PÚBLICA

Una particularidad significativa a este respecto, es el no reconocimiento desde los poderes públicos y mediáticos de la gran dificultad para los jóvenes del entorno pandillero de evadirlo o sortearlo, bajo riesgos de ser amonestados o ajusticiados por las propias "maras". Así, en países como El Salvador u Honduras se han aprobado leyes represivas al límite de la constitucionalidad que alientan a excusar la impunidad de las actuaciones extra-judiciales de las fuerzas policiales, y de la propia vecindad comunitaria, contra niños/as y jóvenes fuera del sistema. El perfil responde normalmente a la franja de edad de entre 5 y 18 años, de género masculino, de bajo nivel económico, con antecedentes judiciales y residente en barrios marginales de la periferia urbana (PNUD y CONADEH: 2001).

La popularización del mensaje individualista a través de la propagación de nuevas confesiones e iglesias ultraconservadoras, sumado al sensacionalismo comercial de los medios de comunicación de masas y a las tendencias

económicas, ha venido reforzando desde hace más de veinte años la reinterpretación de los fenómenos sociales colectivos en clave individual, promoviendo el conformismo social y encomendando a la actitud particular de las personas con menos recursos la difícil tarea de dar respuestas individuales a los problemas de la pobreza y del subdesarrollo (CEPAL y OIJ: 2004; PROLADES: 2004). Con un especial impacto en los/as menores, que ven la televisión de forma casi diaria, y que por su etapa vital tienden a mezclar fantasía y realidad, se detecta la emisión masiva de mensajes e imágenes ligados a la normalización de las conductas violentas y el uso de armas en la vida cotidiana. No sólo se genera un acervo de valores que incentivan y justifican la violencia argumentando razones coyunturales donde supuestamente "no cabía otra opción", o bien "era en defensa propia", sino que se produce un verdadero proceso de desinformación sobre las consecuencias traumáticas tanto para las personas sujeto como objeto de esa violencia, y sus respectivos entornos sociofamiliares.

LOS DESASTRES NATURALES SE SUCEDEN Y AGRAVAN LA VIOLENCIA

Un último factor más ha agravado la proliferación de manifestaciones de la denominada "cultura de la violencia" en estas sociedades, creando un vínculo directo entre el debilitamiento de la identidad comunitaria y personal, y las "soluciones violentas" a las situaciones problemáticas: la gran vulnerabilidad a los desastres naturales (FICR: 1997). Es conocido que la región está situada en una zona de confluencia intertropical y de dos placas de la corteza terrestre, la placa Cocos y la placa Caribe, y principalmente han sido originados por grandes tormentas tropicales, huracanes, terremotos y erupciones volcánicas, que han devastado zonas y pueblos enteros a raíz de inundaciones, deslaves y corrimientos de tierras (BID: 2005). Las personas con menos recursos y las residentes en zonas de "alto riesgo" han sufrido especialmente las consecuencias, perdiéndolo todo, hasta parte de su identidad comunitaria al desaparecer el enclave físico donde tradicionalmente habitaron. Esto ha contribuido decisivamente al desencadenamiento de diferentes manifestaciones de la violencia que estaban latentes en la población, como se puede observar en el incremento de los índices de violencia de género (Bradshaw: 2001). En el último año, la subregión más afectada ha sido la de La Española, que se ha sumado trágicamente a las graves problemáticas derivadas del conflicto social y civil de Haití, destacando el gran número de localidades rurales que se han quedado sin comunicaciones, suministros, y sobre todo sin agua.

La degradación ambiental, y en particular la deforestación masiva, es uno de los factores que están influyendo de forma importante en este aumento de la vulnerabilidad. Las estrategias de reducción de la pobreza de los países de la región han tendido a subordinar las estrategias medioambientales, resultando que no se están atacando las verdaderas causas, que son de naturaleza socioeconómica. Se comprueba además que los índices de desarrollo humano más bajos a lo interno de los países de la región, se encuentran en los lugares de mayor degradación ambiental (Estado de la Nación: 2004).

El gran precedente de la región en la última década sigue siendo el huracán Mitch en 1998.